

FOJA: 65 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 15° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-18281-2020  
CARATULADO : ÁGUILA/FISCO DE CHILE

Santiago, siete de Febrero de dos mil veinticuatro

**VISTOS:**

A folio 1, con fecha 16 de diciembre de 2020, comparece Nelson Caucoto Pereira, abogado, en representación de Ernesto Águila Mancilla, pensionado, y de Ernesto Enrique Águila Zúñiga, psicólogo, ingeniero comercial y periodista, todos con domicilio para estos efectos en Doctor Sótero del Río N°326, oficina N°1104, comuna de Santiago, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago.

Fundan su pretensión en el daño moral sufrido como consecuencia directa de la persecución, secuestro, y torturas perpetradas por agentes del Estado de Chile, hechos que han sido reconocidos por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

El demandante Ernesto Águila Mancilla, relata que en la fecha del golpe de Estado se desempeñaba como Gerente de Operaciones de ENAP en Magallanes, empresa a la que ingresó como técnico a los 18 años, permaneciendo entre 1955 y 1956, reingresando en 1960 al recibirse de ingeniero civil mecánico, especializándose en Chile y Estados Unidos como ingeniero en petróleo y gas, especialidad que no existía en Chile en aquella época.

Señala que militaba para el Partido Socialista desde los 15 años y que su primera detención ocurrió el 29 de septiembre de 1973, fecha en que fue allanada su casa de forma violenta a media noche y fue llevado al Regimiento Pudeto en Punta Arenas. El 10 de octubre fue interrogado por agentes de la Fiscalía Militar abriéndose una carpeta investigativa, temiendo luego ser interrogado por la "SIM", cual era la rutina del lugar, pues ellos aplicaban apremios y torturas. Todos los días, después de las 6 de la tarde, retiraban 3 a 4 prisioneros y lo devolvían en muy mal estado físico, y el hecho de ver el estado en que regresaban quienes volvían de estas sesiones de interrogatorio era de por sí una forma de tortura psicológica, y una advertencia de lo que le podría suceder a cualquiera y así se mantuvo hasta el 30 de octubre de 1973, día en que fue liberado.



Foja: 1

Refiere que en el intertanto recibió una carta de la ENAP en que lo expulsaban de su puesto de trabajo, por lo que una vez liberado trabajó en JUPEMAR en un rubro ajeno a su especialidad, y estuvo en tratamiento psiquiátrico en 1974 y 1975 por una fuerte depresión y continúa en tratamiento hasta el día de hoy producto de las secuelas de la prisión política y torturas vividas.

En seguida, el hijo de don Ernesto, Ernesto Águila Zúñiga, relata que su primera experiencia con la violencia de Estado fue a la edad de 11 años cuando allanaron su casa y detuvieron a su padre en Punta Arenas, oportunidad en que un militar rompió parte de su pieza y sacó en forma violenta cuadros y afiches mientras le preguntaba cosas sobre su padre y mientras éste se encontraba detenido sufrieron un segundo allanamiento.

Indica que, posteriormente, el día 13 de diciembre de 1984, a los 22 años de edad, fue detenido desde el departamento en que vivía en aquel entonces en la calle Los Tres Antonios, comuna de Ñuñoa. Hasta ese lugar llegó un numeroso contingente de la Central Nacional de Informaciones fuertemente armados con el objetivo de detenerlo junto a dos personas más, rompiendo parte del mobiliario, siendo conducidos al cuartel Borgoño de la CNI, permaneciendo 5 días detenido e incomunicado en una pequeña celda, recuerda haber sentido permanentemente la inminencia de la muerte y destrucción dolorosa de su cuerpo. Fue interrogado vendado y completamente desnudo 3 veces, recibiendo golpes de puños y pies y uno en la cabeza contra la muralla, se le aplicaron flagelaciones con palos, armas y otros implementos contundentes, siendo objeto de burlas y amenazas de connotación sexual. Luego fue trasladado a la Policía Investigaciones, relegándosele por 3 meses a la localidad de Negrete, debiendo firmar 3 veces al día en la Comisaría.

Expresa que años después de su detención realizó una larga terapia psicológica y ha debido tratarse en diversas etapas de su vida por depresión.

Afirman que los hechos relatados configuran graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en crímenes de lesa humanidad, entre otros de tortura y persecución, y se han vulnerado todos los instrumentos de carácter internacional que consagran el derecho a la vida y a la integridad personal.

Invoca como fundamento normativo los artículos 1º, 5º, 6º, 7º, 19 N°1º, 2º, 3º, 7º y 38 de la Constitución Política; la Ley N°18.575; y tratados internacionales sobre derechos humanos, citando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención de Viena, entre otros, y sostiene que la responsabilidad del Estado está regida por el derecho público resultando inaplicable el derecho privado, afirmando además que las acciones judiciales en casos de



Foja: 1

responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad son imprescriptibles citando en parte jurisprudencia sobre la materia.

En cuanto al daño, sostiene que en este caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante la situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima que vivieron en carne propia sus representados, el cual avalúan en la suma total de \$300.000.000.- en razón de \$150.000.000.- para cada uno de ellos, o la suma que la judicatura determine, más reajustes desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

Con fecha 15 de abril de 2021 fue notificada la demanda al demandado.

A folio 15 comparece el Fisco de Chile, debidamente representado, quien al contestar la demanda solicita su total rechazo, con costas, conforme los siguientes fundamentos:

En primer lugar opone la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizado el actor. Argumenta que la reparación de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos se ha realizado principalmente por medio de tres tipos de compensaciones, a saber: a) transferencias directas de dinero; b) asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, c) reparaciones simbólicas. Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En lo que concierne a la primera modalidad, diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos, la discusión radicaba entre quienes sostenían que debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras otros estimaban que a través de una pensión vitalicia, ambas con fines resarcitorios.

Indica que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de pensiones la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); en concepto de bonos ha asignado la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; en cuanto a desahucio (bono compensatorio), la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley N°19.123; y por Bono Extraordinario (Ley 20.874), la suma de \$23.388.490.737.-



Foja: 1

Consecuencia de lo anterior, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario ello no obsta a que se pueda valorizar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio; basta con sumar las cantidades pagadas a la fecha, más las mensualidades que todavía quedan por pagar.

En cuanto a las reparaciones específicas, señala que La Ley N°19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Señala que la actora ha recibido en forma reciente recibió el Aporte Único de Reparación Ley N°20.874, por \$1.000.000.-

En cuanto a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios. Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores

Se concedieron, asimismo, beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Por último, en lo referente a las reparaciones simbólicas, señala que al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron



Foja: 1

lugar a aquellas violaciones. Indica que este tipo de acciones pretende reparar tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral. A modo de ejemplo destaca la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, el 30 de agosto de cada año; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; el establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; y, la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los DD.HH., tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras.

Concluye que de todo lo expresado hasta ahora existe una identidad de causa entre lo que se pide en autos y las reparaciones ya realizadas, los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica, tanto la indemnización solicitada en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con el 2497 del mismo, solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes por encontrarse prescrita la acción.

Sostiene que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia, hasta la restauración de la democracia; a la fecha de la notificación de la demanda el 15 de abril de 2021, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva de 4 años que establece el citado artículo 2332 del Código de Bello.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 del Código Civil en relación al artículo 2514, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la de notificación de la demanda transcurrió con creces dicho plazo.

En dicho contexto, precisa que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere



Foja: 1

siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales. Aclara que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización, solo ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción, señalando jurisprudencia al efecto.

Alega que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, se debe aplicar al resolver las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En subsidio a las defensas y excepciones reproducidas precedentemente, interpone, las siguientes alegaciones en relación a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Refiere que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia.

En subsidio de las excepciones y defensas precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, de lo contrario implicaría aceptar un doble pago.

En un último acápite, sobre la procedencia del cobro de reajustes e intereses, precisa que los primeros solo pueden devengarse en caso de que la sentencia acoja la demanda y desde que se encuentre firme y ejecutoriada. En cuanto a los segundos, de conformidad al artículo 1551 del Código Civil establece



Foja: 1

expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

En razón de lo expuesto pide el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

A folio 18 la demandante evacúa la réplica solicitando el rechazo de las excepciones y defensas opuestas, por los motivos que expresa respecto de cada una de ellas, con costas. Precisa que los montos que otorgados por la leyes N°19.234 y N° 19.992 y sus modificaciones sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. Además, el monto de la reparación estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, es decir el Estado de Chile.

En cuanto a la prescripción, reitera que la acción constitucional, para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del estado, artículo 38° inciso 2° de la Constitución, no establece plazo de prescripción; y, efectúa una interpretación antojadiza del marco regulatorio internacional, basta con tener en cuenta el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para esclarecer que se encuentra regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes unido a la cantidad de jurisprudencia en cuanto a la forma correcta de interpretar y aplicar dicho artículo. En consecuencia, la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que norman al Derecho Privado y al Público, ya por la disparidad de las situaciones que se busca regular.

A folio 20 el demandado evacúa la réplica, ratificando la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda.

Reitera que la normativa invocada al oponer la excepción de reparación dictada con la finalidad expresa de atender en su integridad la reparación de las víctimas y de los familiares de aquellas. En dicho sentido, sostiene que el actor ha optado por los beneficios reparatorios de la Ley N°19.992 y sus modificaciones, texto legal que es claro en comprender el daño moral en forma expresa, y en establecer la incompatibilidad de sus beneficios con las pretensiones de una



Foja: 1

acción judicial centrada únicamente en lo económico, como lo dispone su artículo 4° y no el sentido que le da la demandante, pues la compatibilidad de la pensión de reparación que allí se contempla dice relación con otra pensión, únicamente para el caso de que estuviese adscrito en algún régimen previsional, y con la finalidad de que no perdiera la posibilidad de alcanzar la correspondiente pensión o jubilación.

En cuanto a la excepción de prescripción, reitera que siendo una acción exclusivamente pecuniaria, que persigue una suma de dinero y ningún otro aspecto en lo integral, no hay en la réplica fundamento alguno que justifique la imprescriptibilidad. En lo que hay claridad y cierta uniformidad doctrinaria y jurisprudencial está referido a la imprescriptibilidad de las acciones penales para perseguir tales ilícitos, lo que se ve refrendado por la existencia de tratados que así, en forma expresa, lo establecen. Sin embargo, ello no ocurre en la parte civil derivada de los mismos.

A folio 21 se recibe la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 28 de junio de 2023 se citó a las partes para oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, compareció Nelson Caucoto Pereira, en representación de Ernesto Águila Mancilla y de Ernesto Enrique Águila Zúñiga, e interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por Juan Antonio Peribonio Poduje, todos ya individualizados, a fin de que se declare que el demandado debe pagar por concepto de daño moral a consecuencia de la detención ilegítima, torturas y persecución política de que fueron objeto sus representados, la suma de \$150.000.000.- a cada uno de ellos (total de \$300.000.000.), más reajustes e intereses, o la suma que el tribunal estime, con costas.

Lo anterior, por los fundamentos de hecho y de derecho ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

**SEGUNDO:** Que, al contestar la demanda el Fisco de Chile solicita su rechazo o rebaja en el monto indemnizatorio, por los argumentos ya reseñados en lo expositivo de esta sentencia.

**TERCERO:** Que, los demandantes sustentan su pretensión indemnizatoria en el hecho de ser víctima de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra, producto de la detención y torturas a las que fueron sometidos por agentes del Estado de Chile en el ejercicio de sus funciones, las que produjeron las secuelas físicas y psicológicas que afirman han perdurado en el tiempo.

**CUARTO:** Que, atendido lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil,





Foja: 1

toca al actor acreditar los supuestos de hecho en que afinsa su acción.

**QUINTO:** Que, a objeto de acreditar sus asertos, la parte demandante acompañó la siguiente prueba instrumental, que no fuera materia de objeción contraria:

1. Certificado de calificación de víctima correspondiente a cada uno de los actores, reconocida por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y copia autorizada de la página 24 del Informe Informe Valech donde consta el registro de los demandantes bajo los N°294 y N°303, timbrado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

2. Copia del recurso de amparo interpuesto por Ernesto Águila Mancilla a favor de Ernesto Enrique Águila Zúñiga y otra, con fecha 14 de diciembre de 1984.

3. Copia del recurso fecha 15 de diciembre de 1984, interpuesto por Ernesto Águila Mancilla en favor de Ernesto Enrique Águila Zúñiga ante la Corte de Apelaciones para solicitar el término de la incomunicación ilegal a que fuera sometido su hijo, Ernesto Enrique Águila Zúñiga.

4. Copia de la resolución de la Corte de Apelaciones en que resuelve alzar régimen de incomunicación a favor de Ernesto Enrique Águila Zúñiga, con fecha 15 de diciembre de 1984.

5. Copia de la Sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema, ingreso N° 1092-15, de fecha 14 de septiembre del año 2015.

6. Copia de la Sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema, ingreso N° 8105-2018, de fecha 13 de junio de 2018.

7. Copia de la Sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH, caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018

8. Copia de "Certificado", de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por el Psicólogo Clínico Sergio Lucero Conus, respecto de don Ernesto Águila Mancilla.

9. Copia "Informe" suscrito por la médico Psiquiatra, Hannah Bitran Dicowsky, respecto de don Ernesto Águila Zúñiga.

**SEXTO:** Que además, a folio 76 la demandante provocó la declaración de los testigos individualizados en la nómina de folio 50, compareciendo sólo don Aldo Dante Siri Frites, Paz Loreto Robledo Hoecker, Jaime Edmundo Bravo Campos y Cecilia Eugenia Díaz Rebolledo, quienes declararon al tenor del punto N°2 de prueba.

Los testigos coinciden en que la detención, apremios ilegítimos y relegación sufrida por Ernesto Águila Zúñiga (hijo) le perjudicó en el ámbito académico ya que retrasó su carrera un año, lo que les consta porque iban en la



Foja: 1

misma universidad y 3 de ellos eran compañeros de carrera. La segunda testigo agrega que ella estuvo en el lugar de la detención al día siguiente, y constató los vestigios de violencia y algunas manchas de sangre en el departamento, al llegar al día siguiente, al visitarlo durante su relegación estaba muy afectado, con pesadillas en las noches, cambió su temperamento, más introvertido y melancólico. La testigo Cecilia Díaz relata que fueron detenidos juntos y le consta que sufría severos trastornos gastrointestinales y dolores estomacales muy fuertes, ello por cuanto estaban en celdas contiguas, lo que se prolongó hasta 2 o 3 años de liberado, observando también una disminución en su capacidad de concentración por el hecho traumático vivido.

En cuanto a don Ernesto Águila Mancilla, pudieron constatar en forma indirecta, al visitar a Ernesto hijo a su casa los hechos vivenciados y descritos en el libelo, los cuales habrían sido por él relatados. El testigo Aldo Siri declara que tuvo oportunidad de constatar el perjuicio laboral que sufrió don Ernesto padre, por cuanto como gerente de recursos humanos de ENAP entre 2004 y 2010 llegó a sus manos una nómina de exonerados de ENAP y al ser exonerado de la empresa implicó no solo perder arbitrariamente su empleo sin indemnización, sino también su arraigo con la comunidad, afectándose su prestigio dificultándole obtener otro empleo en el rubro con la proyección que él tenía.

**SÉPTIMO:** Que, la demandada por su parte solicitó se oficiara al Instituto de Previsión Social a fin de que informe sobre todos los beneficios reparatorios del Estado recibidos por los demandantes a través de las leyes de reparación.

Sin perjuicio de no haber sido recibido directamente el informe, el demandado acompañó a folio 41 Of. Ord. N° 1730 de fecha 28 de abril de 2021, emitido por el Instituto de Previsión Social, que detalla beneficios de reparación Leyes N°s 19.234, 19.992, 20.874 y 20.134, período comprendido entre febrero de 2005 y junio de 2022.

Sr. Ernesto Águila Mancilla, pensión Ley 19.992.- \$36.397.400.-; pensión Ley N°19.992 por \$36.518.471.-; Bono Ley N°20.874 por \$1.000.000.-; Aguinaldos \$562.653; total a la fecha de \$38.081.124.-; pensión actual de \$237.798.-

Sr. Ernesto Águila Zúñiga, pensión Ley 19.992.- \$32.619.081.-; pensión Ley N°19.992 por \$36.518.471.-; Bono Ley N°20.874 por \$1.000.000.-; Aguinaldos \$562.653; total a la fecha de \$34.181.734.-; pensión actual de \$207.774.-

**OCTAVO:** Que apreciando la prueba producida en autos de conformidad a lo previsto por los artículos 342 y 384 del Código de Procedimiento Civil en relación a los artículos 1700 y 1712 del Código Civil, especialmente los



Foja: 1

documentos indicados a los numerales 1 a 3 del considerando quinto y la testimonial reseñada al considerando sexto, ha de tenerse por acreditado que cada uno de los actores fueron víctimas de detención y apremios ilegítimos por agentes del Estado en la forma en que se expone en el libelo.

En el caso de don Ernesto Águila Zúñiga (hijo) fue sometido además a torturas físicas y amenazas lo que se tradujo en los tratos crueles, inhumanos y degradantes en la forma expuesta en su libelo.

Ambos han sido reconocidos como prisioneros políticos y torturados por la Comisión Valech.

Es posible constatar también que los actores han sido beneficiarios en distintas capacidades conforme lo ya detallado en el motivo precedente. Dichos montos obedecen a reparaciones a personas exoneradas por motivos políticos y a los titulares individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura.

**NOVENO:** Que, la primera defensa planteada por el Fisco de Chile dice relación con la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizados los demandantes al amparo de los beneficios previstos en las textos normativos precitados, ya sea en transferencias directas de dinero, asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante un conjunto de reparaciones simbólicas que menciona.

**DÉCIMO:** Que, el artículo 1° de la Ley N° 19.992 establece una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

A su vez el artículo 2° prescribe que la pensión anual establecida en el artículo 1° ascenderá a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad, a \$1.480.284 para aquellos beneficiarios de 70 o más años de edad pero menores de 75 años y a \$1.549.422 para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; que se pagará en 12 cuotas mensuales de igual monto y se reajustará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen la referida disposición.



Foja: 1

Por su parte el artículo 4° de la indicada ley señala que la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del Decreto Ley N° 869, de 1975. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.

**UNDÉCIMO:** Que, el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos a contar del 11 de septiembre de 1973 a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y a través de la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile”, conocida como Comisión Valech.

De las normas legales recientemente relacionadas es posible concluir que la pensión anual de reparación constituye más bien un beneficio de carácter social y no una indemnización del daño moral para reparar a aquellos que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

En efecto, no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar injustas y vejatorias privaciones de libertad, acompañadas de apremios físicos ilegítimos, lo cual constituye requisito fundamental a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un daño cierto y determinado, optando el actor por la pensión otorgada en la Ley N°19.992 que como puede inferirse de la lectura del detalle de beneficios que recibe.

**DUODÉCIMO:** Que, conforme a lo razonado, no procede imputar a la indemnización debida a cada uno de los demandantes las cantidades que en calidad de beneficiarios de las reparaciones y pensiones hayan recibido ya en su respectiva calidad de preso político o como exonerado político, por lo que no cabe sino desestimar la excepción de reparación integral.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, enseguida corresponde hacerse cargo de la excepción de prescripción alegada por el Fisco demandado en su escrito de contestación.

En primer término, cabe señalar que tratándose de violaciones a los derechos humanos –cual es la calificación que debe darse a los hechos fijados en el motivo séptimo del fallo –el criterio rector en cuanto a la fuente de la



Foja: 1

responsabilidad civil se encuentra en normas y principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos y ello ha de ser necesariamente así por cuanto este fenómeno de graves transgresiones a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es posterior al proceso de codificación, que por lo mismo no lo considera pues, por una parte, responde a criterios claramente ligados al interés privado y, por otra, por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, conforme a lo anteriormente expuesto no cabe calificar la acción indemnizatoria deducida en autos por la parte demandante como de índole o naturaleza meramente patrimonial, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relación contractual –vinculada a un negocio común –o extracontractual, sino configurativas de un delito de lesa humanidad del cual emana, además de la acción penal, una civil de carácter humanitario. Y es de esta clase en razón de que la pretensión del actor se fundamenta en las torturas de que fue víctima, en completa indefensión, por agentes del Estado que disponían de gran poder de coerción.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, en efecto, no puede negarse el carácter de delito de lesa humanidad a aquel que sirven de fuente u origen a la acción impetrada en la demanda.

Asimismo, se ha constatado que los demandantes aparecen incorporados en la nómina de prisioneros políticos y torturados anexada al informe elaborado por la denominada Comisión Valech, reconocidos como víctima de prisión política y tortura; en tal carácter, en lo tocante a la indemnización de perjuicios, hace aplicable también en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares a fin de conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente, los convenios o tratados internacionales, las reglas de Derecho Internacional que se consideran *ius cogens* y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que “*el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales*” y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas”, página 231).

**DÉCIMO SEXTO:** Que, la cuestión de los derechos fundamentales constituye un sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza del hecho, y por tal razón no es posible interpretar las normas que los



Foja: 1

regulan de manera aislada, pues toda conclusión alcanzada en tales circunstancias necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando las referidas normas dejan de aplicarse a un caso que estaban llamadas a regir se produce su contravención y se infringe también la regla del artículo 5° de la Constitución Política de la República que, junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional, establece que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”* y el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que también ha de entenderse el de obtener una indemnización como la que ha sido reclamada en estos autos.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, el derecho de las víctimas a recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho interno chileno, conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 5° de la Constitución Política.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, analizando ahora los preceptos invocados por el Fisco de Chile en sustento de su pretensión de rechazo de la demanda indemnizatoria, cabe señalar que no resultan atinentes las reglas de Derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios al encontrarse éstas en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir la reparación correspondiente a víctimas y familiares de éstas.

Asimismo, en tanto el Fisco acepta explícitamente la posibilidad de que el plazo de la prescripción extintiva que alega se compute desde una época distinta de aquella que señala el artículo 2332 del Código Civil, no puede sino concluirse que hay también una clara aceptación de que los preceptos de este cuerpo legal no son necesariamente los llamados a regir un caso como el planteado y que pueden, por lo mismo, dejar de tener aplicación sin que esta omisión importe contravenirlos.

No debe olvidarse que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos, no sólo por la Constitución sino también por los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, entonces, cuando el Código Civil en su artículo



Foja: 1

2497 señala que las reglas de prescripción “*se aplican igualmente a favor y en contra del Estado*”, debe considerarse que ello no resulta pertinente a esta materia, atendida su particular naturaleza según se ha puesto de manifiesto y es por ello que debe darse aplicación a las normas contenidas en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En efecto, de acuerdo con este último precepto la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho interno. A este respecto debe también tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas.

La Corte Interamericana ha aclarado, además, que el artículo 63.1 de la Convención no remite al Derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de modo que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo (Caso Velásquez Rodríguez).

**VIGÉSIMO:** Que, en el mismo sentido el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene –según ya se afirmó –que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales –en la especie, la de establecer responsabilidades – incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional. Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquellos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, además, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva del inciso 3° del artículo 6° de la Constitución Política de la República y del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que de aceptarse la tesis del Fisco demandado quedarían inaplicadas. Específicamente en lo que se refiere a la norma de mayor jerarquía, puede



Foja: 1

señalarse que el referido artículo 6° se encuentra comprendido en el capítulo denominado “Bases de la Institucionalidad”, por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción y contiene el imperativo categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, no es posible sostener la inexistencia de responsabilidad del Estado en esta clase de infracciones por la prescripción de la acción civil reparatoria, porque el valor justicia que orienta el Derecho y la convivencia social rechaza tal posibilidad, al extremo que el Derecho Internacional ha recogido el criterio que predica que todo daño que sea su consecuencia ha de ser reparado. Además, tal alegación desconoce la naturaleza del hecho que motiva la indemnización solicitada cuando reclama el sistema de responsabilidad extracontractual, porque si bien es cierto que la cuestión está desvinculada de lo meramente convencional o contractual, ello no implica que haya de hacerse aplicación de este régimen, que comprende la cuestión de la culpa y el dolo referidos a un agente determinado. En un caso como el de la especie no resulta necesario ocuparse de acreditar estos supuestos de responsabilidad en los causantes directos del daño, porque inequívocamente los hechos no han podido acaecer sino porque el mismo Estado actuó de manera dolosa cuando desarrolló en forma reiterada conductas lesivas a los derechos fundamentales, esto es, cuando integrantes de sus órganos de seguridad se involucraron en torturas, desapariciones forzadas y muertes, entre otros graves atentados.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, en síntesis, tratándose la tortura de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez en orden a separar ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia que se le reclama.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, en relación con el daño, presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular el daño moral debe ser





Foja: 1

probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona.

Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que, en la especie, la existencia del daño moral en el caso de marras puede presumirse de los hechos ya asentados en el considerando octavo precedente, atendida la gravedad del hecho ilícito y las circunstancias en que este aconteció y sus consecuencias, con motivo de la detención, incomunicación, violencia física y psicológica experimentada por los actores con motivo de su detención ilegal. Respecto de Ernesto –padre- también la afectación en el ámbito laboral atendida su calidad de prisionero político y Ernesto -hijo- sufrió además torturas físicas y psicológicas, experiencias traumáticas que sin duda produjeron diversos efectos psicológicos como necesario correlato de haber sido víctima de dichos actos y que justifican la indemnización por daño moral.

Lo anterior resulta refrendado, con el mérito de lo declarado por los testigos como también de los certificados psicológicos acompañados a los autos, los que si bien consisten en instrumentos privados que no han sido reconocidos por quienes lo emiten en juicio de manera tal de conferirles valor de acuerdo a las reglas aplicables a los testigos, igualmente ofrecen al tribunal la información necesaria para presumir con la gravedad, precisión y concordancia que el artículo 1712 del Código Civil, que tanto el Sr. Águila Mancilla, como el Sr. Águila Zuñiga, sufrieron trastornos de índole psicológico que hicieron necesario someterse a tratamientos psicoterapéuticos más bien prolongados producto del estrés post traumático provocado por la experiencia vivida y la afectación posterior a sus proyectos de vida.

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que, en la determinación del *quantum* de la indemnización no se considerarán los pagos ya recibidos del Estado conforme a las leyes de reparación, atendido lo razonado en los motivos noveno a undécimo que preceden; por ende, éste se evaluará prudencialmente, teniendo en



Foja: 1

consideración para ello el tiempo de detención y relegación en su caso; la innecesaria, irracional y violenta ocurrencia en cada uno de los sucesos relatados y sus perniciosas consecuencias en cada uno de los casos.

Por esta razón se fija la indemnización por concepto de daño moral en la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos) para el demandante Ernesto Águila Mancilla y de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para el demandante Ernesto Enrique Águila Zúñiga.

**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer el demandado, las sumas reguladas se reajustarán conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que el fallo quede ejecutoriado.

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y no habiendo resultado el demandado totalmente vencido se le eximirá, en definitiva, del pago de las costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 1700, 1712, 2492 y 2518 del Código Civil; 144, 160, 170, 383, 384 y 342 del Código de Procedimiento Civil; 5° y 6° de la Constitución Política de la República; 3° de la Ley N° 18.575 y demás pertinentes, se resuelve:

- I. Se rechazan las excepciones deducidas por el demandado.
- II. Que se acoge la demanda de folio 1, condenándose al Fisco de Chile a pagar a la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos) para el demandante Ernesto Águila Mancilla y de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para el demandante Ernesto Enrique Águila Zúñiga, con los reajustes e intereses consignados en el fundamento vigésimo séptimo que precede.
- III. Que no se condena en costas al Fisco al no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

**Rol N° 18.281-2020**

Pronunciada por Juan Pablo Lobiano Correa, Juez Suplente del Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, siete de Febrero de dos mil veinticuatro**



